

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Rancagua
CAUSA ROL : C-3752-2021
CARATULADO : ALLAN/ITAUCORPBANCA S.A.

Rancagua, diecisiete de Abril de dos mil veintitrés

VISTOS:

El 3 de septiembre de 2021, a folio 1, comparece don **Hugo Stephenson Allan Díaz**, domiciliado para estos efectos en Población Quinta Nanito 751, Calle 1 y 2 de octubre, comuna y ciudad de Rancagua, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual en contra del **Banco Itaú Corpbanca**, sociedad anónima de giro bancario, representada por su Gerente General don Manuel Olivares Rossetti, factor de comercio, domiciliado en Independencia 699, Rancagua.

Señala ser cliente del Banco Itaú desde hace 20 años, manteniendo al día de hoy un contrato vigente al tenor de la cuenta corriente, es decir, como cuenta correntista de tal institución. Expone que, durante todos los años como tal, tuvo una muy buena relación con la ejecutiva de cuentas Paola Miranda, de quien dispuso la institución demandada, teniendo esta un actuar diligente y que daba noticias por cualquier situación irregular en la cuenta corriente que mantiene. Era una persona diligente y se mostraba presta a dar noticias de cualquier situación anormal.

Expone que el 4 de marzo del 2020 alrededor de las 13:00 horas, intentó crear la clave única de una tarjeta de crédito adicional, la cual correspondía a su cónyuge doña Luz María Urzúa Abud. Es en ese momento que aparece en la pantalla un cuadro de autenticación de datos en donde se le señala que ingrese el valor de las coordenadas y que al ingresar estos dígitos no se trataba de una transferencia. Relata haber realizado la acción y una vez puestas las coordenadas llegó un código de



Foja: 1

seguridad por mensaje de texto a su celular. Agrega que al día siguiente y por otras acciones que debía realizar, revisó su cuenta corriente y al hacerlo se percató que existía una transferencia programada a las 06:00 horas del mismo día por un monto de \$4.200.000.- de pesos, transferencia que él no había realizado, y según constará en la cartola histórica ni ese día ni antes. Señalar que realiza transferencias con orden estricto y respecto de las cuales existe registro permanente, siendo una persona ordenada en los giros, y, respecto de los cuales, no se le permite en el banco demandado la realización de transferencias mayores a los \$300.000.- pesos cuando se trata de nuevos destinatarios.

Refiere que lo particular y llamativo de esta transferencia y de la cual fue víctima, es que no respetó el monto máximo exigido por el mismo Banco cuando se crea un nuevo destinatario, el cual equivale al monto de \$300.000.- pesos. Sumado a lo anterior y para un conocimiento acabado de los hechos de que fue víctima, señala que jamás ha ocupado el sobregiro de la cuenta, siendo inusual y ajeno totalmente a sus transferencias, la de montos tan altos, lo que asevera será acreditado oportunamente. Añade que el mismo día acudió a la ejecutiva del Banco doña Paola Miranda, de la oficina del banco ubicada en calle Independencia 699, planteándole el fraude del cual fue víctima, quien luego de exponer los hechos de los cuales había sido víctima, le recomienda hacer la denuncia ante Carabineros. Hecha esta denuncia, realiza requerimiento al banco por escrito, lo que fue entregado en la sección de “Servicio al Cliente”, siendo entregado en el propio Banco, junto con los antecedentes de la denuncia. Días después, se le comunica a través de llamada telefónica que el requerimiento había sido rechazado, porque los sistemas de seguridad del banco habían funcionado de manera correcta, dando por hecho que la transferencia la había realizado él mismo. Agrega que realizó la correspondiente apelación a dicha decisión, la cual también fue rechazada.

Respecto de la resolución antes señalada y de la cual se realizó la apelación correspondiente, se señaló categóricamente que él había puesto correctamente la clave y el código con la finalidad de realizar esa transferencia. Es decir, había sido el propio cliente, quien lo había realizado sin señalar quien era el destinatario de su transferencia. Posteriormente se



Foja: 1

entera por la jefa de agencia Maritza Mondaca de quien había sido el destinatario de esa transferencia, además de ponerlo en conocimiento del Rut de este. La misma Sra. Mondaca llama al Banco Estado, quien se enteró donde fue realizada la transferencia. Manifiesta haberse sorprendido cuando le señaló ese nombre ya que era totalmente desconocido. Luego de aquello, buscó la transferencia y era lo que señaló la ejecutiva, pero estaba incompleto el nombre, sin embargo, el Rut era el que correspondía.

Alega que jamás se ha encontrado con esa persona en la vida, desconociéndola. Se revisaron las cartolas con la misma jefa, y en ese instante, es donde ocurre el hecho más insólito, respecto del cual la ejecutiva del Banco le señala: *“esto lo hicieron en su casa, fue en su propio domicilio donde ocurrieron los hechos”*, Asegurando que había sido su propio círculo familiar desde donde se había generado la transferencia, sin certeza alguna de quien era la persona imputada en tales hechos. Si bien es cierto que la cuenta corriente es bipersonal, su cónyuge jamás ha realizado un giro ni nada vinculado al Banco. Después de esta acusación dice haberse sentido decepcionado. Jamás pensó que la institución a la cual le ha fiado el resguardo de sus intereses, encontrándose está obligada a la seguridad de aquellos y, la que había él mismo recomendado a terceros para el resguardo de sus intereses, buscaría eximirse de la responsabilidad que le conlleva en este caso y de esta forma.

Añade que nunca pensó que la postura indolente de la ejecutiva y el actuar irresponsable del banco, frente a un cliente que lleva una antigüedad de 20 años como cuentacorrentista, permitiría hacerse acreedor de acusaciones calumniosas y para mal de colmo, agravar los dichos, imputando responsabilidad a su propio círculo familiar. Luego de esto y de escuchar tamañas acusaciones de la ejecutiva, se sintió levemente descompensado, sufriendo un desvanecimiento en la propia oficina, debiendo ser asistido por la persona que le acompañaba, quedando atónito frente a esta situación.

El 27 de mayo del 2020, al tratar de revisar el saldo de su tarjeta de crédito, relata haberle sucedido lo mismo que el 4 de marzo antes dicho, es decir, le aparece en la pantalla un cuadro de autenticación de datos en donde se señala que no se trata de una transferencia. Esta vez continúa para



Foja: 1

que llegara el código a su celular, realizando capturas (pantallazos) de pantallas de los mensajes y enviándoselos al correo electrónico del ejecutivo don Ignacio Rojas, ejecutivo que le señalaron ubicara para algún problema fuera de lo común. El 28 de mayo del 2020, por problemas con su computador acudió a un técnico en computación particular, para que le asesorara en el arreglo de su equipo. Luego, intentó cambiar la contraseña de su cuenta y nuevamente apareció en pantalla la misma información ya dada del fraude. Alega haber llamado inmediatamente al Banco, conversando con doña Carol Fuentes, ejecutiva del banco, la que le informa que el requerimiento hecho el día anterior no se había tomado en cuenta, es decir don Ignacio Rojas no consideró la denuncia que estaba realizando (la del 27 de mayo recién señalada). Expone que, a la fecha, no ha tenido ninguna respuesta del Banco Itaú, incluso enviándole las pruebas necesarias para entender el fraude electrónico del que fue víctima.

No obstante lo expuesto, señala que en este sentido también se abrió causa penal con el objeto de permitir al Ministerio Público recabar todos los antecedentes necesarios para dar con los autores de este delito respecto del cual fue víctima pero todo ha instancia suya, es decir sin colaboración alguna del banco demandado. De ese modo la Policía de Investigaciones ha realizado actuaciones pertinentes al esclarecimiento de los hechos, diligencias de carácter investigativo para dar con quienes fueron los autores de este delito, dando lugar a un sospechoso de nombre Francisco Javier Soto González, probándose en tal sentido que de ninguna manera él ha sido el responsable de estos hechos. Dichas actuaciones se encuentran radicadas en investigación penal, en causa RIT Ordinaria 8352–2020, seguida ante el Tribunal de Garantía de Rancagua, continuándose al día de hoy con un proceso penal vigente por el delito de “Espionaje Informático”, delito previsto y sancionado en el artículo 4 y 2 de la Ley 19.223, encontrándose el individuo antes señalado debidamente formalizado. Hoy en día la causa se encuentra en pleno desarrollo a la espera de lo que ocurra durante el proceso, esperando de esta forma la sentencia correspondiente.

En cuanto al derecho cita el artículo 2221 del Código Civil, 2242, en lo relativo a la responsabilidad del depositario. Señala que habiendo seguro es innegable que el banco debe generar coberturas, sin embargo, en caso de



Foja: 1

no tenerlo como prestador de servicio, debe tener los mecanismos de resguardo necesarios para que frente a un fraude como el descrito en los hechos. Es por aquello que estima se está en presencia de una responsabilidad civil por parte del Banco Itaú, toda vez que este está obligado a tomar todos los resguardos frente a los fraudes de los servicios, no imputando de esta forma la responsabilidad al cuenta correntista, como lo ha hecho en este caso, citando jurisprudencia para fundamentar sus pretensiones. Refiere que la ley especial aplicable es la N°21.234 modificatoria respecto de la Ley N°20.009, la que cita en lo pertinente.

Puntualiza seguidamente respecto a la existencia de un contrato entre las partes, el que da origen a varias obligaciones, citando los artículos 1545, 1546, 1489, enfatizando en los requisitos de la condición resolutoria tácita, aplicados en este caso, por cuanto sostiene que (i) Nos encontramos ante un contrato bilateral, que genera obligaciones para ambas partes; (ii) Existe un incumplimiento imputable a una de las partes, esto es al Banco Itaú, al no haber devuelto la totalidad de los dineros sustraídos de la cuenta corriente al actor; (iii) A la fecha, ha incumplido su obligación que correspondía según el contrato acordado; (iv) Declaración por sentencia judicial, ello es el objeto de la presente demanda.

Respecto a la indemnización de perjuicios, cita el artículo 1489 y 1556 del Código Civil. En cuanto a la existencia de los perjuicios cuyo monto y condiciones detalla, estima que es evidente que le fueron producidos en este caso, por cuanto, depositó la confianza y resguardo de su patrimonio en el banco demandado quien no cumplió con esta obligación. En cuanto al lucro cesante, cita el artículo 1559 del Código Civil, relativo a que la indemnización propia de las obligaciones de dinero se denomina intereses. Agrega que respecto a la culpa o dolo que debe concurrir en el incumplimiento, nuestra legislación presume la culpa en materia contractual, citando los artículos 1547 y 1681 del Código Civil, estimando que el acreedor no está obligado a acreditar la culpa, sino que el deudor debe demostrar que no incurrió en ella, probando el debido cuidado o diligencia empleado en el cumplimiento.

En cuanto a la valoración de los daños y perjuicios ocasionados, los desglosa en (i) Daño directo: comprende las sumas que ha tenido que



Foja: 1

invertir tanto en el pago de abogados, como, asimismo, las sumas sustraídas de la cuenta corriente que ascienden a la suma de \$4.200.000.- (cuatro millones doscientos mil pesos) reajustados conforme a la variación que experimente el I.P.C. desde que ocurrieron los hechos hasta el pago efectivo; (ii) Daño moral: comprende la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos). Respecto al daño moral cita el artículo 19 N°24 y 1 de la Constitución Política de la República, y que es una persona de 72 años, quien sufre de salud feble en razón de su edad, debiendo cargar con estos problemas adicionales, siendo en tal sentido una carga emocional perjudicial aun mayor a su salud, los que se demuestran en los exámenes provocados con posterioridad a los hechos descritos en la demanda, padeciendo desde este día pánico nervioso, imposibilitándole dormir con tranquilidad, tal como lo hacía antes de los hechos antes descritos. De este modo el daño moral consistente en la lesión de intereses extra patrimoniales, se ha visto reflejado en este caso primero, en la afectación de sus expectativas respecto a la forma en que debe actuar el demandado, segundo en la aflicción de sus esperanzas, el sufrimiento provocado, la angustia desde que ha sufrido el robo de su dinero desde su cuenta corriente en donde se entera por primera vez del robo que fue víctima, sufriendo desde esta fecha al día de hoy la afectación a su salud.

Por lo expuesto, y previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda civil de incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios en contra de Banco Itaú, representado por su representante legal don Manuel Olivares Rossetti, ya individualizados, acogerla a tramitación y en definitiva declarar, que: (1) La parte demandada deberá pagar la suma de daño directo de \$4.200.000.- de pesos reajustado conforme al I.P.C. desde la sustracción de los dineros hasta el pago efectivo del dinero a su representado; (ii) La demandada deberá pagar a la demandante por daño moral la suma de \$40.000.000.- de pesos, y (iii) Que se condene a la demandada al pago de las costas personales y procesales.

En subsidio, solicita tener por interpuesta demanda por responsabilidad extracontractual, en razón de los mismos antecedentes expuestos en lo principal los que da por enteramente reproducidos.



Foja: 1

El 27 de septiembre de 2021, a folio 8, se notifica la demanda y su proveído en la forma dispuesta en el artículo 44 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil.

El 15 de octubre de 2021, a folio 13, comparece la demandada quien interpone la excepción dilatoria contemplada en el número 4 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda en contra de ambas acciones interpuestas por Hugo Stephenson Allan Díaz, con el fin de que el actor aclare y precise (i) cuál o cuáles serían el o los contratos infringidos, (ii) las características del o los mismos, en específico si la misma comprende productos de carácter bipersonal o unipersonal o ambas y (iii) si en razón de lo anterior, las partes que los suscribieron, ordenando al mismo, corregir su demanda subsidiaria en el sentido de que dicha acción cumpla con los requisitos dispuestos en los numerales 2 y 3 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. El 21 de octubre de 2021, a folio 4 del cuaderno “1.1 Excepciones Dilatorias”, la demandante evacua el traslado solicitando el rechazo. El 4 de noviembre de 2021, a folio 6, se rechaza la excepción, sin costas, rigiendo el plazo para contestar la demanda.

El 16 de noviembre de 2021, a folio 16, comparece la demandada contestando la demanda principal y subsidiara, solicitando su rechazo, con costas. Respecto de la demanda principal, expone que debe ser rechazada ya que Itaú Corpbanca no es responsable de los hechos y consecuencias que se describen en ambas acciones, por cuanto el Sr. Allan pretende responsabilidad a Itaú Corpbanca de una operación bancaria por el monto de \$4.200.000.- calificada por él mismo de fraudulenta, al haber terceros obtenidos mediante algún tipo de engaño sus claves de seguridad y tarjeta Icode o de coordenadas. Indica que la operación bancaria objeto de este procedimiento no presentó ningún patrón de fraude, utilizándose la clave acceso Web y las claves de la tarjeta de coordenadas del Sr. Allan, medidas de seguridad que son de exclusiva propiedad y responsabilidad de este último. Sostiene que el uso por terceros de las medidas de seguridad creadas por el Sr. Allan, cedidas voluntariamente por este último a terceros, no puede ser imputado a Itaú Corpbanca para responsabilizarlo



Foja: 1

patrimonialmente por dicho hecho; luego, no existen los supuestos incumplimientos alegados por el Sr. Allan y menos la causalidad entre éstos y los perjuicios solicitados indemnizar, que además son desproporcionados e infundados, razón suficiente para rechazar la demanda de autos.

Por otra parte, alega que el Sr. Allan no es legitimario activo en la presente causa ya que la cuenta corriente supuestamente perjudicada no es únicamente de su propiedad, sino que se trata de una bipersonal en la cual participa su cónyuge a quien el primero no representa en este juicio.

Luego de efectuar una relación de la demanda interpuesta, alega que el actor carece de legitimidad activa para interponer la demanda de autos, al no ser el único interesado y titular del supuesto derecho reclamado. Funda su alegación en que el supuesto perjuicio padecido por el Sr. Allan, se produjo en instancias del cambio de clave de un producto que no pertenecía a él, sino que a su cónyuge, doña Luz María Urzúa Abud (en adelante la “Sra. Urzúa”), quien no comparece en este procedimiento. Sin embargo, más adelante en su demanda, el Sr. Allan señaló que la cuenta corriente desde la que se ejecutó la operación financiera, era bipersonal, esto es, que pertenecía a él y a la Sra. Urzúa, señalando que esta última jamás ha realizado un giro o una operación financiera vinculada con el banco desde aquel producto. Así, el actor al comparecer por sí sólo, sin representar a la Sra. Urzúa quien no compareció a interponer la presente acción por sí misma o representada, no tiene legitimación activa para interponer la presente demanda y obtener en definitiva una sentencia a su favor.

Seguidamente, y respecto a la operación bancaria objeto del juicio, sostiene que la demanda debe ser rechazada ya que los hechos fundantes, tanto el ilícito que denuncia como los perjuicios causados, no son atribuibles a Itaú Corpbanca, por cuanto la transacción financiera por la suma de \$4.200.000.- realizadas de la cuenta corriente respectiva, cumplió con todas las medidas de seguridad que Itaú Corpbanca pone a disposición de sus clientes. En este sentido, y luego de presentado el reclamo por parte del Sr. Allan, Itaú Corpbanca procedió a analizar la operación financiera catalogada como fraudulenta en estos autos, y el resultado de dicho análisis fue que no existieron patrones de fraude al momento de su ejecución. Sostiene que la operación bancaria se llevó a cabo cumpliendo todas las



Foja: 1

medidas de seguridad dispuestas por Itaú Corpbanca. En efecto, la operación por la suma de \$4.200.000.- que se llevó a cabo desde la cuenta corriente terminada en 4000, fue validada con claves Icode o de coordenadas y clave secreta cuya utilización conocimiento y resguardo era de exclusiva responsabilidad del Sr. Allan. De hecho, agrega, la tarjeta Icode o de coordenadas fue entregada al Sr. Allan y sólo él conocía los números de coordenadas necesarios para realizar las operaciones bancarias. Adicionalmente, la clave secreta para ingresar al portal Web de Itaú Corpbanca fue creada por el propio Sr. Allan; todos estos elementos de seguridad fueron utilizados al momento de la realización de la operación bancaria de la cual intenta responsabilizar a Itaú Corpbanca. Por ello concluye que el ingreso a los canales virtuales que dispone Itaú Corpbanca con las claves pertenecientes y creadas por el propio demandante, para -acto seguido- realizar una operación bancaria como la de autos, en la cual se requería y fue utilizada su tarjeta Icode o de coordenadas, no sólo validaron la identidad del Sr. Allan, sino que además obligaban a Itaú Corpbanca a ejecutar dicha operación. En este sentido, cita el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley 707. Así, al ejecutar una operación autorizada con todos los elementos de seguridad de propiedad y responsabilidad del Sr. Allan- no hizo más que cumplir con el vínculo contractual celebrado por ambas partes. En conclusión, al no existir ninguna negligencia por parte de Itaú Corpbanca, puesto que no fueron vulnerados sus sistemas de seguridad, la demanda de autos debe ser rechazada con costas al no poderse atribuirse los hechos fundantes de la acción a la demandada.

Alega que una cuestión esencial para entender la ausencia de responsabilidad de Itaú Corpbanca respecto a la operación bancaria de autos, es que los elementos de seguridad que se utilizaron en la misma fueron creados y/o configurados por el Sr. Allan, siendo éstos de su exclusiva responsabilidad. Señala que las claves personales que establecen los clientes de Itaú Corpbanca representan las medidas de seguridad que permiten a Itaú Corpbanca establecer la identidad del titular de la cuenta corriente y/o el producto bancario, al momento de realizar una operación bancaria; dichas claves son únicas y de exclusiva responsabilidad del titular de la cuenta corriente. Dicha responsabilidad del cliente, queda establecida



Foja: 1

en las propias cláusulas contractuales que el Sr. Allan libre y voluntariamente suscribió al adquirir el producto financiero de cuenta corriente. En este sentido, luego del análisis interno realizado por Itaú Corpbanca señalada, se determinó que en las operaciones concurrieron las claves y elementos de seguridad que configuró y que encontraban dentro de la esfera de seguridad del Sr Allan. Por ello en la operación bancaria que el Sr. Allan califica de fraudulenta, no existió ninguna adulteración de sus claves, así como tampoco de ninguna otra medida de seguridad configurada por él mismo. Así las cosas, fundamente su defensa en que las claves de ingreso a los sistemas de cuentas corrientes, claves de las tarjetas de coordenadas, son única y exclusivamente de responsabilidad del cliente, quien las configuró y es el único conocedor de las mismas. La obtención fraudulenta de terceros de dichas claves o su entrega por parte del Sr. Allan por error, tal como habría ocurrido en el presente caso según los hechos relatados por éste en su demanda, no pueden generar una responsabilidad para Itaú Corpbanca, al no existir ningún hecho u omisión culposa de ésta última.

Refiere que el contexto en el cual se realizó la operación financiera objeto de estos autos fue por medio de los mensajes recibidos por el Sr. Allan en su computador y en su celular en el cual le solicitaron ingresar las coordenadas de su tarjeta, acción que reconoció ejecutar, de lo que se desprende un reconocimiento explícito sobre el origen y las razones en virtud del cual se llevó a cabo la operación financiera objeto de estos autos, siendo el propio demandado quien voluntariamente entregó a un tercero las claves secretas de seguridad, respecto de los productos que mantiene con Itaú Corpbanca, mediante la digitación de las mismas en el mensaje de texto que le solicitó las claves de coordenadas. En este sentido, Itaú Corpbanca –a través de diversas campañas publicitarias- informa a sus clientes que el banco jamás le pedirá las claves secretas de acceso o de las tarjetas de coordenadas a través de algún medio de comunicación (teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, etc.) ya que dichos comportamientos son conductas típicas de fraude ejecutadas por personas ajenas a la entidad financiera. La publicidad descrita no es una cuestión exclusiva de Itaú Corpbanca, sino que es parte de una campaña transversal en todo el sistema



Foja: 1

financiero. Sin embargo, el Sr. Allan en ninguna parte de su demanda se hace cargo de sus actos propios y la falta de cuidado que tuvo en los hechos que describe en su acción. En este caso, necesariamente se debe tomar en cuenta el hecho objetivo y determinante que acarreó la ejecución de la operación bancaria aquí alegada, cual fue la entrega del Sr. Allan de sus claves confidenciales que tiene con Itaú Corpbanca a terceros; dicha conducta y sus consecuencias deben ser únicamente imputables al Sr. Allan. En el caso concreto, se utilizaron todas las claves de seguridad del Sr. Allan para ejecutar la operación que desconoce, no existiendo vulneración de ninguno de los sistemas de seguridad dispuestos por Itaú Corpbanca.

Señala luego que los montos pretendidos por el Sr. Allan a título de indemnización son injustificados, ya que los daños alegados son inexistentes, pues el Sr. Allan, era el único responsable en el manejo de sus claves electrónicas y los sistemas de seguridad por él mismo configurado. Sostiene que al no existir nexo causal entre la conducta de Itaú Corpbanca y los supuestos hechos fraudulentos que describe el Sr. Allan en su acción, no corresponde condenar al primero a pagar la suma de \$4.200.000.- a título de daño emergente, ya que dicha suma corresponde a la transacción que fue ejecutada satisfactoriamente, mismas razones que llevan a que no corresponda indemnizar a título de daño moral al Sr. Allan. No obstante, la suma de \$40.000.000.- solicitada a indemnizar por concepto de daño moral, resulta ser excesivamente desproporcionada respecto a los hechos relatados en la demanda, ya que no existe ninguna explicación sobre cómo los hechos habrían afectado extrapatrimonialmente al Sr. Allan, como tampoco existe relación o justificación entre dichos hechos y el excesivo monto solicitado por perjuicio extrapatrimonial, las que muestran que buscan mercantilizar indebidamente los supuestos daños padecidos, razón suficiente para desestimar con costas la demanda interpuesta en estos autos.

En cuanto al derecho, sostiene en resumen que la demanda civil interpuesta por el Sr. Allan debe ser rechazada ya que (1) el Sr. Allan carece de legitimación activa, (2) no existe incumplimiento alguno de Itaú Corpbanca respecto de la operación financiera objeto de autos, (3) no existe culpa en el actuar de Itaú Corpbanca, (4) falta de nexo causal entre la conducta de Itaú Corpbanca y los perjuicios respecto de los cuales el Sr.



Foja: 1

Allan solicita ser indemnizado, (5) Itaú Corpbanca no se puede hacer cargo del actuar imprudente del Sr. Allan y (6) los perjuicios alegados por el Sr. Allan son inexistentes.

Por lo expuesto, solicita tener por contestada la demanda interpuesta por el Sr. Allan en contra de Itaú Corpbanca y rechazarla en todas sus partes, con costas.

En el otrosí, contesta la demanda subsidiaria interpuesta dando por reproducidos todos los argumentos de hecho y de derecho expuesto en lo principal, solicitando el rechazo de la demanda subsidiaria de responsabilidad extracontractual interpuesta en contra de Itaú Corpbanca, pues al no existir hecho ilícito ejecutado por Itaú Corpbanca, tampoco puede existir responsabilidad civil extracontractual, razón suficiente para rechazar en todas sus partes la demanda subsidiaria interpuesta en autos, con costas.

El 24 de noviembre de 2021, a folio 18, la demandante evacua la réplica resaltando la insistencia que mantiene la demandada en responsabilizar directamente a su representado en los hechos que le trajeron tantos perjuicios, y que la misma conducta que se ha señalado en la demanda mantuvieron los trabajadores dependientes de la demandada, en cuanto confirma que la transacción fue realizada en el entorno de su mandante cuando ello no fue así, como ha sido ya demostrado y quedará plasmado en el proceso. También insiste, pero ahora con más profundidad que el perjuicio lo sufrió don Hugo Allan y no solo en lo económico o patrimonial sino que también en lo emocional por este mismo trato denigrante, por la misma falta de atención de la demandada, en cuanto a que no solo se burlaron todos sus sistemas de seguridad resultando en definitiva su representado con una pérdida de más de cuatro millones de pesos, sino que luego lo culparon a él, a su conyugue y ahora a un tercero pero que estaba en el entorno de su representado como aquel que realizó la operación, argumento que no solo se transforma en un reiteración de una conducta dañosa para con su representado, pero que también es falsa y delictual.

El 2 de diciembre de 2021, a folio 20, la demandada evacua el trámite de la dúplica respecto de ambas demandas.



Foja: 1

El 1 de febrero de 2022, a folio 29, se lleva a cabo la audiencia de conciliación, la que es objeto de incidente de nulidad por la demandada, en atención a que la demandante no cumplió la carga procesal de notificar la resolución que cita a dicha audiencia dentro de plazo, incidente que es acogido a folio 3 del cuaderno “2.0 Incidente de Nulidad de lo Obrado”. Luego, el 12 de abril de 2022, a folio 39 del cuaderno principal, se lleva a cabo la audiencia de conciliación decretada, con la asistencia de la apoderada de la demandante y en rebeldía de la demandada. Llamadas las partes a conciliación, esta no se produce.

El 13 de abril de 2022, a folio 40 del cuaderno principal, se recibe la causa a prueba, fijándose los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos. El 5 de julio de 2022, a folio 42 del cuaderno principal, la demandada interpone recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la resolución que recibió la causa a prueba. El 4 de agosto de 2022, a folio 50, se rechaza la reposición y se concede la apelación subsidiaria. El 15 de noviembre de 2022, a folio 135 del cuaderno principal, consta que se tuvo por desistido del recurso de apelación deducido por el abogado de la demandada, dictándose el respectivo cúmplase a folio 136 del cuaderno principal.

El 24 de agosto de 2022, a folio 68 del cuaderno principal, la parte demandada solicita en lo principal la suspensión del procedimiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. En el segundo otrosí, solicita la suspensión del procedimiento mientras se falle el incidente deducido en lo principal. El 29 de agosto de 2022, a folio 3 del cuaderno “3.0 Incidente General”, la parte demandante evacua el traslado del incidente deducido, solicitando su rechazo. El 30 de agosto de 2022, a folio 5 del cuaderno “3.0 Incidente General”, se rechaza el incidente, sin costas.

El 2 de noviembre de 2022, a folio 113 del cuaderno principal, se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

A. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE DOCUMENTOS:

PRIMERO: Objeción de folio 87. Que a folio 87 del cuaderno principal, la parte demandada hace uso de la citación concedida por



Foja: 1

resolución de 29 de agosto de 2022 respecto de los documentos acompañados por el demandante el 26 de agosto de 2022, objetando y observando tres de ellos, a saber (i) “copia fotostática de tarjeta de crédito de banco Itaú Corpbanca del titular don Hugo Stephenson Allan Díaz”, por falta de integridad, toda vez que de la imagen de la tarjeta acompañada por el demandante no se puede apreciar con claridad los datos de la misma. En ese sentido, la calidad del escáner de la tarjeta es tan deficiente que no se queda claro quién es el titular y cuál es el número de la misma. Así las cosas, dicha tarjeta podría perfectamente no ser del demandante, perteneciendo a cualquier persona ajena al juicio, contraviniendo lo señalado por el actor en su presentación; (ii) “Copia simple Correo electrónico enviado por el cliente Hugo Allan Díaz a Maritza Mondaca, agente del Banco Itaú Corpbanca”, pues al tratarse el documento de una captura de pantalla de un correo electrónico, es imposible constatar la veracidad del mismo. Ello ya que dicha “copia simple” fácilmente puede ser manipulada por la parte que presentó el documento, modificando el texto del supuesto correo electrónico enviado por el Sr. Allan e incluso el remitente y/o destinatario del mismo. A mayor abundamiento, dicho documento no fue acompañado por el Sr. Allan en el soporte electrónico correspondiente, lo que genera dudas de si realmente dicho correo fue enviado por el Sr. Allan con el contenido que ahí se establece; por último, (iii) “Imágenes capturadas por el cliente, donde éste advierte intento de fraude, enviadas mediante correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2020, al Banco Itaú Corpbanca dirigido al ejecutivo Ignacio Rojas”, pues carecen de veracidad ya que se trata de una simple fotografía de la pantalla de un celular, sin que pueda apreciarse la fecha en que se habría llevado a cabo la acción; en ese sentido, el documento acompañado por el actor perfectamente podría tratarse de una imagen tomada por un tercero durante cualquier día previo a la presentación del Sr. Allan. En definitiva, los 3 documentos no cuentan con la integridad ni veracidad exigida por ley, por lo que solicita le sean restado todo mérito probatorio.

Por resolución de folio 89, se confirió traslado a la objeción, el cual fue evacuado por la demandante a folio 3 del cuaderno “4.0 Objeción de documentos”, solicitando el rechazo de la objeción, haciendo presente que



Foja: 1

no procede la falta de integridad respecto a la (i) “Copia fotostática de tarjeta de crédito de banco Itaú Corpbanca del titular don Hugo Stephenson Allan Díaz”, pues fue parte de la denuncia realizada por el actor respecto de los hechos ocurridos, además de constar como parte de la carpeta investigativa llevada por el Fiscalía Local de Rancagua, respecto de la causa penal relacionada que se sigue en el Juzgado de Garantía de Rancagua, carpeta investigativa que fue acompañada por la contraria mediante un oficio. En cuanto a la (ii) “Copia simple Correo electrónico enviado por el cliente Hugo Allan Díaz a Maritza Mondaca, agente del Banco Itaú Corpbanca”, haciendo presente que no corresponde su falta de veracidad en su contra sin señalar prueba en que se funde, correspondiéndole comprobarlo al basarse en suposiciones. En cuanto a las (iii) “Imágenes capturadas por el cliente, donde éste advierte intento de fraude, enviadas mediante correo electrónico de 27 de mayo de 2020, al Banco Itaú Corpbanca dirigido al ejecutivo Ignacio Rojas”, tampoco corresponde la objeción, debiendo también probar la falta de veracidad que alega.

SEGUNDO: Objeción de folio 88. Que a folio 88 del cuaderno principal, la parte demandante objeta los documentos acompañados por la contraria a folio 78, consistentes en la (i) Resolución de 26 de agosto de 2022 dictada por Nicolás Muñoz Soto, Supervisor del área de Fraude e Intercambio Gerencia de Operaciones Minorista de Itaú Corpbanca, y (2) Tabla Explicativa. Funda su objeción en que los documentos presentados han sido elaborados en su totalidad por la parte que los presenta, de forma que, al ser emitido precisamente por el Banco Itaú, está sola circunstancia no permite que los documentos puedan hacer prueba ni que sean válidas las conclusiones que enuncia la contraria a partir de los documentos acompañados, toda vez que no puede desprenderse certeza de un instrumento proveniente de la propia parte. Sostiene que, de lo contrario, si se optara por admitir esta clase de documentos para hacer fe de los hechos que buscan probar, las partes en un juicio civil podrían precisamente fabricar prueba de sus propias manos y hacer que éstas hagan las veces de auténticas.



Foja: 1

Por resolución de folio 91, se tuvieron por objetados los documentos, dejándose su resolución para la sentencia definitiva.

TERCERO: Objeción de folio 90. Que a folio 90 del cuaderno principal, la parte demandada objeta los documentos que se tuvieron por acompañados bajo apercibimiento del número 3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil por resolución de 29 de agosto de 2022, a saber (i) Respecto del Informe de movimientos bancarios de la cuenta corriente N°0208534530, acompañado con el número 4 en la presentación de don Hugo Allan Díaz de 26 de agosto, tal documento no puede entenderse como reconocido bajo el apercibimiento del número 3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el mismo no emana de Itaú Corpbanca. Sostiene que el informe acompañado por el Sr. Allan no contiene el logo de Itaú Corpbanca, un timbre, la firma de algún funcionario, ni algún otro símbolo que permita verificar que el documento emanó de su parte. En ese sentido, el documento acompañado perfectamente pudo haber sido elaborado por el mismo Sr. Allan o por un tercero ajeno al juicio, razón por la cual debe restársele todo mérito probatorio. En segundo término, respecto del documento ““Cartolas históricas de transferencia de la cuenta corriente N°0208534530 del Banco Itaú Corpbanca”, acompañadas con el número 5 en la presentación del Sr. Allan de 26 de agosto de 2022, se observan y se objetan por falta de veracidad, toda vez que el documento acompañado por el Sr. Allan no se trata precisamente de cartolas históricas de transferencias, sino de una impresión de un correo electrónico supuestamente enviado por Itaú Corpbanca al Sr. Allan. Además, al tratarse de la impresión de un correo electrónico, fácilmente pudo haber sido manipulado por el Sr. Allan, modificando el texto del supuesto correo electrónico enviado por Itaú Corpbanca, el remitente y/o destinatario del mismo. A mayor abundamiento, dicho documento no fue acompañado en el soporte electrónico correspondiente, lo que genera dudas de si realmente dicho correo fue enviado por quién ahí se señala y con la fecha y contenido que ahí se establece. Hace presente que de tales documentos no es posible diferenciar aquellos que serían nuevos destinatarios de aquellos que no lo serían.



Foja: 1

Por resolución de folio 1 del cuaderno “5.0 Objeción de documentos”, se confirió traslado de la objeción.

Por resolución de folio 3 del cuaderno “5.0 Objeción de documentos”, se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía de la demandante, dejándose su resolución para la sentencia definitiva.

CUARTO: Que previo a resolver las objeciones opuestas, debe tenerse presente que para que ellas puedan prosperar es necesario que cumplan con ciertos requisitos, a saber: (i) que se invoque al menos una causal legal, la que solo puede ser la falsedad, falta de autenticidad o de integridad del documento; luego, (ii) que se indique en forma concreta cuáles son sus hechos constitutivos aplicados al caso concreto, y no de manera genérica; y finalmente (iii) que dichos hechos específicos que justifican la causal invocada al caso concreto se prueben.

QUINTO: Que en la objeción de folio 87 “copia fotostática de tarjeta de crédito de banco Itaú Corpbanca del titular don Hugo Stephenson Allan Díaz” por falta de integridad alegada por la demandada, sí se han cumplido los dos primeros requisitos antes enunciados, por lo que resta analizar si el último de ellos también se ha cumplido en la especie, a fin de determinar si la objeción formulada ha de ser acogida o no. En ese sentido, se ha fallado que la falta de integridad –causal de objeción invocada por Itaú Corpbanca– importa, en estricto rigor, que el instrumento no sea completo. Luego, en el caso del documento objetado, mal puede ello afirmarse, toda vez que por más que la deficiencia en el escáner que alega, consta que a folio 85 el Ministerio Público acompañó copia de la carpeta investigativa llevada por el Fiscalía Local de Rancagua, respecto de la causa penal RUC 2000275351-1 del Juzgado de Garantía de Rancagua, como parte de la prueba solicitada por la misma parte demandada. En la página 23 de dicha carpeta investigativa se desprende idéntica copia del documento que objeta, la que no puede sino corresponder a aquella tarjeta que vincula al actor con la demandada. Así las cosas, sin perjuicio de la calidad con que fuera escaneado el documento y que alega la demandada, no cabe duda que el documento objetado es íntegro y completo, circunstancia que además no ha sido desvirtuada de ninguna manera por la parte objetante, corresponde



Foja: 1

por tanto que su valor probatorio sea ponderado soberanamente por el Tribunal; debido a ello, la objeción opuesta será rechazada.

En cuanto a las objeciones de la “Copia simple de correo electrónico enviado por el cliente Hugo Allan Díaz a Maritza Mondaca, agente del Banco Itaú Corpbanca”, y del documento “Imágenes capturadas por el cliente, donde éste advierte intento de fraude, enviadas mediante correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2020, al Banco Itaú Corpbanca dirigido al ejecutivo Ignacio Rojas”, ambas son fundadas en falta de “veracidad”. En el caso específico, se desprende de la sola lectura de tales documentos que se trata precisamente de los hechos objeto de la presente acción, consistentes en la dinámica mediante la cual se habría verificado la transferencia de fondos desde la cuenta del actor, y de la que diera cuenta el mismo a la demandada; por otro lado, en este punto no se allegó ningún medio de prueba a fin de desvirtuar la veracidad que se alega, correspondiendo entonces a aseveraciones de la parte objetante sin pruebas que la sustenten, razones que llevan a rechazar la objeción.

SEXTO: Que en lo que respecta a la objeción de folio 88, como puede apreciarse, amén de no invocar hecho alguno constitutivo de falta de integridad o de falsedad respecto de los documentos objetados, es del caso tener presente que de la fundamentación expuesta en el motivo segundo, se puede observar que lo que en definitiva se ha impugnado respecto de dichos documentos es el valor probatorio de ellos, circunstancia que en nuestro derecho procesal es inadmisibles, pues la facultad exclusiva y excluyente de dar o no valor probatorio a la prueba rendida solo corresponde al Tribunal y no a las partes litigantes. Así las cosas, la impugnación formulada a fojas 88 será rechazada.

SÉPTIMO: Que conforme lo dispone el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos privados se tendrán por reconocidos: “3°. Cuando, puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo;”.



Foja: 1

Luego, los fundamentos de las impugnaciones efectuadas por la demandada hacen referencia más al valor probatorio del instrumento que a su supuesta falsedad o falta de integridad, cuestión exclusiva del sentenciador, razones que llevan a que la objeción sea rechazada.

En cuanto a documento “Cartolas históricas de transferencia de la cuenta corriente N°0208534530 del Banco Itaú Corpbanca” por supuesta falta de veracidad, no se acreditó por ningún medio de prueba la mentada objeción en orden desvirtuar la autenticidad, integridad o eventual falsedad que se alega -pues directamente no invoca ninguna de tales causales-, correspondiendo entonces a aseveraciones de la parte objetante sin pruebas que la sustenten en orden a desconocer el origen del documento, razones que llevan a rechazar la objeción.

B. EN CUANTO A LAS TACHAS:

OCTAVO: Que a folio 132, en el marco de la audiencia de prueba testimonial de la parte demandada, la parte demandante formula tacha en contra de los testigo don John Alejandro Rodríguez Colmenares, venezolano, soltero, licenciado en administración de empresas, domiciliado en calle Presidente Riesco 5227, comuna de Las Condes, Santiago, y don Nicolás Edison Muñoz Soto, chileno, soltero, supervisor de operaciones del Banco Itaú, domiciliado en calle Presidente Riesco 5537, comuna de Las Condes, Santiago, por la causal prevista en el N°5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, fundado en que según las declaraciones de los testigos, se desempeñan como trabajadores del Banco Itaú que es el demandado en este juicio, lo que configura la causal citada, solicitando se prescinda de sus declaraciones.

NOVENO: Que evacuando el traslado conferido, la parte demandada se opone a la tacha señalando que las máximas jurisprudenciales no impiden que un dependiente de determinada sociedad o empresa pueda prestar declaración sobre un caso específico que tiene directa relación con el trabajo desempeñado por el trabajador respectivo. Agrega que en las respuestas otorgadas por los testigos se desprende claramente que prestarán sus declaraciones como especialistas no manifestando ninguna respuesta otorgada por el mismo, algún interés favorable a las pretensiones del Banco demandado.



Foja: 1

DÉCIMO: Que las causales de inhabilidad tienen por objeto excluir un testimonio de la valoración del juez, en razón de verse afectada la veracidad o imparcialidad de una declaración por alguna de las causales establecidas en los artículos 357 y 358 del Código de Procedimiento Civil. De este modo, la regulación sobre la forma de hacer valer las inhabilidades de los testigos dispone que “sólo se admitirán las tachas que se funden en alguna de las inhabilidades mencionadas en los artículos 357 y 358, y con tal que se expresen con la claridad y especificación necesarias para que puedan ser fácilmente comprendidas”.

UNDÉCIMO: Que el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil dispone que son también inhábiles para declarar los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio. Luego, para resolver la presente incidencia, necesario será considerar que del acertado análisis de las respuestas del primer testigo, don John Alejandro Rodríguez Colmenares, este reconoce expresamente la calidad de trabajador dependiente de dicha parte desde septiembre de 2020, esto es, de aquella que los presentó en juicio, precisamente la parte que exige su declaración; luego, respecto del testigo don Nicolás Edison Muñoz Soto, reconoce a su vez la calidad de trabajador dependiente desde el año 2013, por lo que no cabe duda que a su respecto se configura la inhabilidad contemplada en el numeral quinto del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la tacha fundada en tal disposición deberá ser acogida sin más trámite.

c. EN CUANTO AL FONDO:

DUODÉCIMO: Que don Hugo Stephenson Allan Díaz, ya individualizado, acciona en procedimiento ordinario demandando la responsabilidad contractual y extracontractual en contra del Banco Itaú Corpbanca, también individualizado, formulando las peticiones apoyadas en los argumentos expuestos en la parte expositiva de esta sentencia, que se tienen por reproducidos.

DÉCIMO TERCERO: Que, contestando la demanda, la parte demandada pide se rechacen las pretensiones del actor, con costas, por los argumentos vertidos en la parte expositiva de este fallo, los que se dan por reproducidos.



Foja: 1

DÉCIMO CUARTO: Que para acreditar los fundamentos de su pretensión, la parte demandante se valió de los siguientes medios de prueba:

a. Instrumental:

- i. Copia fotostática de denuncia de desconocimiento de transferencia de fondos del Banco Itaú, suscrito por la víctima Hugo Stephenson Allan Díaz, de 5 de marzo de 2020, a folio 72;
- ii. Copia fotostática de cédula de identidad de don Hugo Stephenson Allan Díaz, a folio 72;
- iii. Copia fotostática de tarjeta de crédito de banco Itaú Corpbanca del titular don Hugo Stephenson Allan Díaz, a folio 72;
- iv. Informe de movimientos bancarios de la cuenta corriente N°0208534530 del Banco Itaú Corpbanca, de 5 de marzo de 2020, a folio 72;
- v. Cartolas históricas de transferencia de la cuenta corriente N°0208534530 del Banco Itaú Corpbanca, que corren desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de julio de 2022, ambos inclusive, a folio 72;
- vi. Copia simple Correo electrónico enviado por el cliente Hugo Allan Díaz a Maritza Mondaca, agente del Banco Itaú Corpbanca, a folio 72;
- vii. Copia de Informe remitido por el Banco Itaú al Ministerio Público el 29 de noviembre de 2021, a folio 72;
- viii. Imágenes capturadas por el cliente, donde éste advierte intento de fraude, enviadas mediante correo electrónico de 27 de mayo de 2020, al Banco Itaú Corpbanca dirigido al ejecutivo Ignacio Rojas, a folio 72;
- ix. Informe de Banco Estado Oficio N°S/N remitido al Ministerio Público, de 20 de septiembre de 2021 y anexos;
- x. Copia de acta de audiencia de 10 de diciembre de 2021, en la cual Ministerio Público realiza formalización investigación en contra del imputado Francisco Javier Soto González, por



Foja: 1

los delitos de estafa y apropiación indebida, en causa RIT 8352-2020 del Juzgado de Garantía de Rancagua, a folio 72;

- xi. Copia de solicitud de Ministerio Público, de 28 de febrero de 2022, de procedimiento ordinario a procedimiento simplificado, en que contiene requerimiento al imputado por los delitos de uso indebido de información informática, prescrito en el artículo 2 de la ley 19.223 y de apropiación indebida, prescrito en el artículo 467 del Código Penal, a folio 72;
- xii. Dos capturas de pantalla, de 22 de agosto de 2022, del sistema electrónico de transferencias de Banco Itaú en que consta que el cliente Hugo Allan Díaz debe sujetarse a un límite de \$300.000 para realizar transferencias a nuevos destinatarios, a folio 72;
- xiii. Certificado de Banco Itaú en que consta que don Hugo Allan es cliente y titular de cuenta corriente N° 0208534530 del Banco Itaú Corpbanca, a folio 72;
- xiv. Documentos ordenados a exhibir, lo que constan en folio 95, consistentes en (i) Hoja de firma de Contrato plan de productos y servicios financieros personas naturales firmado por don Hugo Allan Díaz y que dice relación con la cuenta corriente número 208534530; (ii) Solicitud de modificación de cupo (Línea de crédito y/o tarjeta de crédito) de 6 de junio de 2018, por un monto de \$11.700.000.- firmado por don Hugo Allan Díaz; (iii) Ficha de riesgo comercial de don Hugo Allan Díaz de 6 de junio de 2018; (iv) Correo de 6 de junio de 2018 enviado por Juan Martín Cartés a don Hugo Allan Díaz solicitando visto bueno para hacer la apertura de tarjetas de créditos; (v) Solicitud de productos realizada y firmada por don Hugo Allan Díaz para efectos de adquirir los productos financieros ofrecidos por Itaú Corpbanca.

b. Testimonial:

- i. El 22 de agosto de 2022, según consta en folio 65, comparece doña Bárbara Graciela Rivadeneira Hernández,



chilena, psicóloga, domiciliada en calle Manuel Rodríguez 0619, Población Oscar Bonilla, Rancagua, quien previamente juramentada expone respecto de los puntos de prueba que se detallan a continuación: al punto de prueba número dos que “por supuesto que sí, se vulneró toda la parte informática que tiene que tener un proceso de transacción bancaria. Yo tengo entendido que lo máximo cuando uno hace una transacción nueva permite un monto por la suma de \$200.000 mil pesos y no por la suma de \$4.200.000 y después de 24 horas de puede hacer una nueva transacción. Debo decir que don Hugo Allan no realizó ninguna transferencia por el monto señalado, cuando le llega un mensaje o una notificación a don Hugo, que se había realizado una transferencia por un sobre giro por un monto de 4.200.000. El ahí se percata que lo estafaron. Después de eso en el mes de marzo del año 2020, en esa fecha fue el sobregiro. El nunca transfirió a un destinatario nuevo y menos a esa persona que no conoce”. Repreguntada para que diga si el banco demandado cumplió con otorgar seguridad a los fondos depositado por el demandante en su cuenta bancaria, responde que “no, no le dio ninguna seguridad debida como ya lo mencioné, anteriormente la cuenta era nueva y don Hugo es súper ordenado con sus cuentas y el banco hace un sobregiro y libera las cuentas sin pedir autorización, sin llamar, el banco no resguardó los dineros de don Hugo siendo este cliente de varios años. Respecto al punto de prueba número 3, responde que “no cumplió. Porque al momento de asistir a denunciar, hablar con la ejecutiva del banco demandado Itaú, solamente se limitaron a echar la culpa y que tenía que hacer la demanda en Carabineros, le insinuaron y le dijeron que podría haber sido alguna de su círculo cercano, como su esposa, y que él tenía la culpa porque no tenía seguro y la ejecutiva lo manda a tomar un seguro en el primer piso del banco ya



que estábamos en el segundo piso del banco. Todo esto me consta porque yo estaba presente en ese momento”. Repreguntada para que diga cuanto tiempo transcurrió entre el aviso de la transacción bancaria, no realizada por don Hugo Allan, y haber concurrido al banco demandado donde escuchó y presenció lo relativo a que don Hugo era el responsable de la transacción o alguna persona cercana a él, responde que “el giro ocurrió a las 6 de la mañana y eso es anormal en las cuentas de él, porque jamás se había programado un giro a una cuenta nueva y por ese monto. Y él se da cuenta a las 8:00 de la mañana, que se había realizado este giro el mismo día. Porque a esa hora el comienza su jornada, toma el computador revisa su cuenta bancaria y horóscopo chino y se da cuenta del sobre giro realizado. En ese momento él me llama por teléfono y nos fuimos al banco inmediatamente. Y es en ese momento cuando yo escucho todo lo declarado anteriormente, sufrió la descompensación don Hugo en ese momento, esto lo provocó el banco porque no le dio ninguna respuesta ni le prestó ayuda, no le prestó información sobre el giro realizado, solo se limitó la ejecutiva a decirle que no podían hacer nada y que le preguntaba me acuerdo textual de esto “que le preguntara a su esposa la señora Luz María si ella había realizado el giro” a lo cual doña Luz María nunca hizo ese giro porque ella nunca se mete a las cuentas de don Hugo, y eso se puede comprobar en las cartolas histórica del banco ya que ellos tienen cuentas bipersonal pero ella jamás ha hecho algún movimiento”. Al punto de prueba número cuatro, responde que “no hay monto que devuelva a don Hugo como él era anteriormente al sobre giro, porque desde ese instante desde cuando salimos del banco a hacer la denuncia la costó volver a ser autónomo. Comenzó a depender de algunas personas, ya no quería volver a los cajeros automáticos. Ya que él, lo hacía anteriormente. Solo



que era cotidiano. Se volvió un miedo constante, él comenzó a pedir ayuda porque se sentía inútil y se sentía estafado. Comenzó a tiritar su mano derecha, bajó de peso y comenzó a fumar y eso pudo ser lo más bajo y se come las uñas. Tiene un malestar constante, se cuestiona su inteligencia, y se fue para abajo en un hoyo. Y eso de ponerse a fumar a la edad de 70 años, después que lo había dejado hace más de 20 años, y todo esto me consta porque yo trabajé con él haciendo el aseo en su casa desde el año 2015 hasta el año 2020”. Repreguntada para que diga si tiene conocimiento que a don Hugo Allan el banco demandado haya restituido la suma transferida o girada sin su autorización o consentimiento, responde que “no, él la tuvo que reponer de su dinero que corresponde a los fondos mutuos que tiene para su vejez o emergencia, el banco nunca le restituyó los dineros y solo se limitó a menoscabarlos, tampoco le prestó ayuda psicológica por la pérdida de su dinero”. Repreguntada para que diga si los perjuicios y daños que se han ocasionado, el banco debe reparar o no a don Hugo Allan, responde que “sí, absolutamente debe reparar, ya que este lo provocó. Debe repararlo en dinero, psicológicamente y pedirle disculpas. Y en cuanto al monto en dinero este debe por la suma de \$50.000.000 millones de pesos. No hay dinero que repare el daño sistemático que le hicieron a él”. Repreguntada para que diga en virtud de los hechos en qué estado se encuentra la salud mental de don Hugo Allan, actualmente, responde que “no soy psiquiatra, pero si soy psicóloga, y puedo afirmar que don Hugo Allan desde que inició este acontecimiento, el fraude a la fecha ha sufrido el trastorno ansioso depresivo y complejo de inferioridad permanente”. Al punto de prueba número cinco, se remite a lo señalado anteriormente. Al punto de prueba número ocho, responde que “no, no se expuso nadie en su sano juicio se va a exponer a esos perjuicios, lo que falló es la



seguridad del banco, donde se le vulneraron todas las platas de don Hugo, quiero dejar en claro que don Hugo es una persona pensionada, ordenada y que jamás pondría en riesgo su dinero. Fue el banco el que falló”.

- ii. Seguidamente depone como testigo don Manuel Isaac Mera Badilla, chileno, Jefe de Turno Mina División El Teniente, Codelco, con domicilio en calle Padre Luis Belmar 0181 Villa Alto Castillo 3, Machalí, quien previamente juramentado expone respecto de los puntos de prueba que se detallan a continuación: al punto de prueba número dos responde “totalmente negligente, por cuanto converso con don Hugo Allan me comenta y me describe lo sucedido, claramente alguien sin su permiso y sin su consentimiento retiró dinero de su cuenta corriente. Eso mismo dejó en evidencia la vulnerabilidad del banco donde los protocolos de seguridad del banco no se aplicaron. También quiero agregar que el giro que le realizaron en el mes de marzo del año 2020 por un monto de \$4.200.000, en el cual don Hugo se da cuenta que le realizaron este giro sin su autorización a la cual este se dirige al banco y que le dieran solución sobre el giro realizado y todos los protocolos del banco fallaron. A esto me refiero porque en el banco trataron de culpar a don Hugo sobre el giro realizado, sin antes realizar la investigación correspondiente porque el banco está encargado de proteger el dinero de sus clientes y la ejecutiva se encargó de culpar a don Hugo Allan por el supuesto giro”. Repreguntado para que diga si la transferencia o giro fue realizado con el consentimiento de don Hugo, responde que “la transferencia fue realizada sin el consentimiento de don Hugo”. Al punto de prueba número tres, responde que “el banco nunca cumplió ni con el contrato, ni con la forma de proceder a denuncia de don Hugo, del porque le retiraron el dinero sin su autorización y su consentimiento”. Al punto de prueba número cuatro, responde que “don



Hugo ha sufrido el daño moral, psicológico deterioro anímico, en el cual a simple vista se puede apreciar en su lenguaje corporal y los constantes episodios de depresión y auto cuestionamiento a causa de lo sucedido en el banco, porque el banco trató constantemente de culpar a don Hugo, que él fue quien retiró el dinero. Todo este daño moral y cuestionamiento constante, considero que se produce de una vida que llevaba don Hugo donde él tenía conocimiento de administración y liderazgo en cuanto a temas sindicales y empresariales. Y cuando le pasa todo esto lo del banco en donde este le hace sentir o creer que es una persona sin conocimiento y sin control de sus actos. Y cuanto a la compensación este debe ser por un monto en dinero aproximado de \$44.000.000 millones. Todo esto me consta porque yo conozco a don Hugo hace más de una década y por consulta laborales que yo le realizo tenemos contacto esporádicamente”. Al punto de prueba número cinco, se remite a lo declarado anteriormente. Al punto de prueba número ocho, responde que “él jamás ha cometido errores en ese sentido, y esto me consta porque yo lo vi administrando y gestionando temas de tesorería y administración”.

- iii. En tercer lugar, depone como testigo don Hernán Andrés Caneo Yáñez, chileno, pensionado, con domicilio en Veracruz 1417 dpto. 14 Marcos Chiaponi, Rancagua, quien previamente juramentado expone respecto de los puntos de prueba que se detallan a continuación: al punto de prueba número dos responde “no tengo cuenta corriente en el banco y el banco tiene la obligación de cuidarme mi plata y que no desaparezca. Yo supe porque un día me encuentro con Hugo y me comenta lo que le pasó me dice que le habían girado un monto de su cuenta corriente por la suma de \$4.200.000, yo me asusté porque lo vi muy mal físicamente y le propuse que fuera al médico porque era



irreconocible como él estaba. También quiero agregar que esto que me comentó Hugo fue con fecha mes de marzo del año 2020 el día exacto no lo recuerdo. Por lo que él me comentó, él nunca hizo ese giro por esa cantidad de plata, esa plata se la sacaron a él de su cuenta corriente del Banco Itaú. Recuerdo que un día me encuentro con Hugo y le pregunto cómo le fue con el robo de su dinero y que respuesta le dio el banco. Me dijo a mí, que a él casi le da un ataque por la respuesta dada por el banco, que fue que esto pasaba dentro de su familia y no era responsabilidad del banco. El banco le echó la culpa a la familia”. Al punto de prueba número tres, responde que “no cumplió por ningún lado, no investigó sobre el robo de su dinero y que había pasado. No cumplió de ninguna forma”. Al punto de prueba número cuatro, responde que “en cuanto a los daños si los ha sufrido aun y en forma personal esto no tiene un monto fijo, no tiene costo, para mí una perdida por el monto de cuatro millones tendría que compensar mil veces por un millón por el daño ocasionado, la parte psicológica y lo que me asombra como le tiemblan sus manos, sus labios y lo que más me llamó la atención es cuando él con lágrimas en sus ojos me dice que como es posible que el banco dude de su familia. Debo decir que como él es vecino yo estaba acostumbrado a verlo bien jovial y después de lo sucedido con el banco su estado anímico y de salud cambió del cielo a la tierra, debo decir que tenemos la misma edad pero si caminamos juntos de ve la diferencia porque ahora sus pasos son más cansino, no puede caminar rápido, él camina más lento. En cuanto a la parte anímica debo decir que ahora no se ve en la calle pasa encerrado en su departamento”. Repreguntado para que diga si luego del giro o transacción no autorizada por don Hugo Allan este continuó o no realizando transacciones y actividades de manera normal en relación con sus productos bancarios, por conexión internet,



responde “no para nada, tenía miedo de apretar el teclado porque la mano se le va para otro lado”. Repreguntado para que diga si don Hugo Allan a propósito de los hechos relatados se observa como una persona temerosa e insegura de sus actos, responde “por supuesto, por la mala experiencia, ahora anda a saltos con todo lo realizado para transferencias bancarias”. Al punto de prueba número cinco, se remite a lo declarado anteriormente. Al punto de prueba número ocho, responde que “él nunca le ha entregado las claves a ninguna persona”. Repreguntado para que diga que tan riguroso era don Hugo Allan en sus transacciones, responde que “muy riguroso, siempre él portaba su equipo porque lo dejaba bajo siete llaves, me refiero a su computador”. Repreguntado para que diga si en razón de su rigurosidad era posible que se expusiera a algún fraude, responde que “no era posible porque una vez recuerdo que llegué a su departamento a hacer una consulta y él se encontraba en su computador y me pidió que lo esperara ya que se encontraba ocupado, él era muy cuidadoso con sus cosas personales”.

DÉCIMO QUINTO: Que a la parte demandada se valió de las siguientes probanzas para acreditar los fundamentos de su defensa:

a. Instrumental:

- i. Resolución de 26 de agosto de 2022 dictada por Nicolás Muñoz Soto, Supervisor del área de Fraude e Intercambio Gerencia de Operaciones Minorista de Itaú Corpbanca, el cual da cuenta que, la transacción objeto de estos autos no se enmarcó dentro del concepto Pharming, a folio 78;
- ii. Tabla explicativa que detalla que la transacción objeto de estos autos por la suma de \$4.200.000.-, se llevó a cabo a través de la dirección de internet usualmente utilizada por el Sr. Allan al momento de llevar a cabo tales tipos de operaciones -IP Habitual- no existiendo, por ende, alteración



Foja: 1

alguna de los sistemas de seguridad dispuestos por Itaú Corpbanca, a folio 78;

- iii. A folio 84 y 85, consta oficio solicitado 25 de agosto de 2022, en que el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Rancagua remite copia digital de causa RUC 2000275351-1.
- iv. Transcripción de percepción documental que consta en folio 109, respecto a dos archivos de audio contenidos en un pendrive.

- b. En cuanto a la testimonial rendida, deberá estarse a lo razonado en el acápite primero de lo resolutivo en cuanto a las tachas.

DÉCIMO SEXTO: Que cabe recordar que la parte demandante ha interpuesto, como acción principal, una de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual en contra de Banco Itaú Corpbanca y, en subsidio, una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. En este orden de consideraciones y teniendo presente la naturaleza de las acciones deducidas, huelga señalar inicialmente que, para que la acción de responsabilidad contractual prospere, deben verificarse de manera copulativa los siguientes requisitos: 1) que exista un vínculo contractual entre demandante y demandada; 2) que la demandada hubiese incumplido o cumplido imperfectamente las obligaciones contractuales; 3) que, en su caso, dicho incumplimiento o cumplimiento imperfecto se hubiere llevado a cabo negligentemente; y 4) que el referido incumplimiento o cumplimiento imperfecto, llevado a cabo por una actuación negligente de la demandada, hubiese causado el mal que alega el actor, derivándose como consecuencia de ello, los daños invocados en su libelo pretensor.

Por su parte, para que pueda prosperar la acción por responsabilidad extracontractual, y por ende surja la obligación de indemnizar los perjuicios deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos: a) Una acción u omisión del Banco Itaú; b) La imputabilidad, esto es, que la acción u omisión se haya efectuado por negligencia o dolo del Banco Itaú; c) El daño a la víctima; d) La relación de causalidad entre el hecho imputable del Banco Itaú y el daño sufrido por la víctima. Esto significa que el daño sufrido por la víctima sea consecuencia directa de la acción u omisión imputable del agente; e) La capacidad del autor del hecho ilícito.



Foja: 1

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la existencia de un contrato de cuenta corriente entre las partes queda acreditada, entre otros documentos, con la instrumental de folio 95, que da cuenta de ser la última página del contrato sobre plan de productos y servicios financieros personas naturales, protocolizado en la 45 notaría de Santiago de don René Benavente Cash, de 3 de diciembre de 2017, bajo el repertorio N°48203/2017, respecto de la cuenta corriente número 208534530. Sin perjuicio de ello, y no existiendo mayores antecedentes a su respecto, no resulta posible desprender de los instrumentos aparejados -con mediana claridad- la época de este, su naturaleza ni sus estipulaciones. Con todo, no puede perderse de vista el artículo 1546 del Código Civil que dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre le pertenecen a ella. Luego, tratándose de un contrato de cuenta corriente, el banco no puede sino constituirse como la parte fuerte del vínculo contractual, fortaleza que radica, entre otros aspectos, la en la ejecución de medidas tendientes a prevenir fraudes.

DÉCIMO OCTAVO: Que también ha quedado acreditado mediante acta de audiencia de 21 de septiembre de 2022, en causa RIT 8352-2020 del Juzgado de Garantía de Rancagua, que el 4 de marzo de 2020 el requerido Francisco Javier Soto González, concertado con sujetos de identidad desconocida, hicieron uso no autorizado de las claves de acceso e información privada de la víctima Hugo Stephenson Allan Díaz, con domicilio en la comuna de Rancagua, ingresando al sistema online de la cuenta corriente de la víctima N°0208534530 en el Banco Itaú, realizando una transferencia bancaria por un monto de cuatro millones doscientos mil pesos (\$4.200.000.-) hacia la cuenta corriente del Banco Estado N°32670706671, cuyo titular es el requerido Francisco Javier Soto; y que la víctima se da cuenta de la estafa al revisar la misma tarde su cuenta corriente y observar la falta de fondos. Luego, consta que se condena al imputado individualizado por su participación en calidad de autor en los delitos consumados en concurso medial de uso indebido de información electrónica del artículo 2° de la ley 19.223 con el delito de estafa del



Foja: 1

artículo 473 del Código Penal, por las penas que allí se indican, quedando tal sentencia ejecutoriada.

DÉCIMO NOVENO: Que cabe tener presente en este aspecto que el artículo 1545 del Código Civil sienta el principio por el cual se le da realce a la autonomía de la voluntad en cuya virtud opera "*La libertad de que gozan los particulares para pactar los contratos que les plazcan, y de determinar su contenido, efectos y duración*", como lo apunta el Profesor Arturo Alessandri en su clásica obra sobre "Los Contratos". Por su parte, el profesor Jorge López Santa María comenta que: "*El principio de la autonomía de la voluntad es una doctrina de filosofía jurídica según la cual toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es, a la vez, la fuente y la medida de los derechos y de las obligaciones que el contrato produce*", como lo indica en su texto sobre Los Contratos, Parte General. Siendo esto así, quiere decir que la autonomía de la voluntad se basa en los principios propios de la ilustración de la libertad y de la igualdad, que llevados ambos al plano jurídico, se traducen en igualdad y libertad jurídica de las partes. La libertad jurídica se divide, a su vez, en la libertad para contratar, que es la libertad para celebrar o no el contrato y con quién, y la libertad contractual, que es la libertad para fijar los términos o contenidos del contrato.

VIGÉSIMO: Que a la luz de lo precedentemente reflexionado, conviene detenerse en las argumentaciones que al efecto sostuvo el actor durante la secuela del juicio. En este sentido, la tesis que propone el demandante es que el contrato impedía realizar operaciones de transferencias de fondos entre cuentas corrientes no autorizadas, lo que se confirma con las imágenes acompañadas a folio 72 que dan cuenta de ello. Siendo pacífico el hecho de haberse efectuado una transferencia de fondos desde la cuenta corriente del actor a la de un tercero mediante el uso de su usuario y claves personales mediando el ardid ya analizado (pues cuenta de ello da la sentencia condenatoria citada, el relato del actor y defensa de la demandada), el demandante afirma al mismo tiempo que no le cupo participación en dicho acto ni que fue el responsable sino que, por el contrario, fue cometido por un tercero, trasgrediendo las políticas de seguridad contratadas. Luego, resulta probado que una de las medidas de



Foja: 1

seguridad del Banco Itaú para proteger a sus clientes el limitar una primera transferencia a una cuenta nueva a \$300.000.- y cuando se trata de una cuenta RUT, ese límite es de \$200.000.-, al igual que el hecho de no existir transferencias anteriores a la cuenta del sujeto que, mediando engaño, intervino el sistema mediante el cual operaba el actor, lo que fluye de la misma documental que da cuenta del historial de transacciones efectuadas desde la cuenta corriente del actor.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, encontrándose probado entonces el hecho de existir una limitación de monto máximo por parte del Banco para realizar transferencias a nuevos destinatarios, y que este sistema, a pesar de mantener la limitación antedicha, permitió una primera transferencia por \$4.200.000.- a una cuenta a la que el demandante nunca había transferido dineros y que, en consecuencia, de haber operado debidamente tal limitación, el consecuente perjuicio se habría limitado a una suma de \$300.000.-, lo que se desprende en el cuidado empleado por parte del actor al revisar sus movimientos bancarios y dar inmediato aviso del fraude ocurrido. A fin de dilucidar este postulado, corresponde efectuar primeramente algunas consideraciones relativas al "*onus probandi*" o carga de la prueba. Al efecto se ha dicho que la necesidad de probar no es una obligación, sino una carga, toda vez que la primera "*implica la subordinación de un interés del obligado al interés de otra persona, so pena de sanción si la subordinación no se efectúa; la carga, en cambio, supone la subordinación de uno o más intereses del titular de ellos a otro interés de el mismo.*" "*El litigante no está, pues, obligado a probar, la ley no lo compele a ello, es libre para hacerlo o no hacerlo; pero si no proporciona la prueba de su derecho, sus pretensiones no serán acogidas por el juez.*" (Derecho Civil. Parte Preliminar y Parte General, página 409. Tomo segundo. Alessandri, Somarriva y Vodanovic).

Se ha sostenido invariablemente la dificultad, en ciertos casos, de determinar a quién le corresponde cargar con el peso de la prueba, pero unánimemente se ha aceptado que ésta le corresponde rendirla al que sostiene una proposición contraria al estado normal u ordinario de las cosas, al que pretende destruir una situación adquirida. Así surgió la antigua regla de que el demandante es quien debe tener sobre su responsabilidad



Foja: 1

presentar las pruebas del hecho que alega a su favor, enunciándose en el derecho romano de dos maneras: *onus probandi incumbit actori* (la carga de la prueba incumbe a la parte actora) u *onus probandi incumbit ei qui dicit* (la carga de la prueba incumbe al que afirma). Y esto no puede ser de otra manera precisamente a partir de lo que se ha dicho, esto es, que el actor pretende introducir un cambio en la situación existente, de manera que hasta que se pruebe lo contrario, se entenderá que el demandado debe conservar las ventajas de su situación.

De esta forma, el demandado que simplemente niega los hechos que han sido sostenidos por el actor, no es necesario que presente prueba alguna en apoyo de ésta. Pero, si el demandante acredita los presupuestos fácticos en que funda su pretensión, la situación anterior se invierte.

El demandante deberá probar los hechos constitutivos, que son aquellos que producen el nacimiento de un derecho o de una situación jurídica que antes no existía y que son el fundamento de su demanda, encontrándose el demandado, por su parte, en la necesidad de probar los hechos extintivos, impeditivos o modificativos capaces de justificar el rechazo de la demanda del actor. Lo anterior ha quedado plasmado en la regla contenida en el artículo 1698 del Código Civil, que en su inciso primero dispone: "Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta".

VIGÉSIMO SEGUNDO: De este modo, y al encontrarse probado el hecho pormenorizado en el considerando previo y que configura los elementos basales de la responsabilidad contractual, resulta pertinente destacar que, pese a haberse alegado de manera reiterada por el actor, en parte alguna la entidad demandada se refiere al señalado límite máximo dispuesto -como no podría ser de otro modo- como un mecanismo de seguridad tendiente a limitar eventuales defraudaciones existentes en el desarrollo de actividades financieras, y en mayor medida mediante Internet.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, por otro lado, resulta pertinente detenerse en la alegación de la demandada relativa a la falta de legitimación activa del actor. En este sentido, además de los fundamentos señalados por el Banco, de la lectura de las cartolas del demandante se desprende que su cónyuge y titular a su vez de la cuenta, no efectúa operaciones de depósitos,



Foja: 1

sino que es el actor quien le gira a ella de manera mensual la suma de \$1.100.000.-, de lo que se colige que el perjuicio demandado corresponde a daños que sólo afectan a este.

VIGÉSIMO CUARTO: Que de este modo, la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual deberá ser acogida, resultando innecesario pronunciarse respecto de la demanda subsidiaria.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en este orden de ideas, y en cuanto al daño moral demandado, este debe ser indemnizado pues del tenor del artículo 2329 del Código Civil es indemnizable todo daño, es decir, todo detrimento, perjuicio, menoscabo, molestia o aflicción.

Pues, bien, existe abundante prueba en autos de las molestias, angustia y desazón que debió padecer el demandante, un hombre de la tercera edad, frente al fraude del que fue víctima, el cual pudo haberse evitado en gran medida si hubiese operado debidamente el sistema de limitación de la primera transferencia que tiene implantado la demandada para la seguridad de sus clientes. En efecto, si ese método de control hubiese funcionado, y siendo un hecho probado el autos que el demandante fue objeto de un acto delictual mediante el cual le fueron sustraídas sus claves de seguridad, los autores de este hecho ilícito no habrían logrado obtener más que \$300.000 desde la cuenta corriente de la víctima. Sin embargo, en este caso, como el mencionado límite no fue aplicado por la parte demandada, lograron extraer todo el dinero que este tenía en su cuenta corriente y la totalidad de la línea de sobregiro que el actor tenía disponible.

Esta inoperancia del sistema de seguridad del banco Itau-Corpbanca y la negativa de este banco para admitir tal falencia y solucionar el problema causado al actor justifica que deba responder por todo el perjuicio extrapatrimonial causado, el que el tribunal estima no en la suma que el actor pretende, la que le parece excesiva, sino en la suma de \$3.000.000, que es aquella que le parece una compensación más acorde a la extensión de los perjuicios morales probados en este litigio.

VIGÉSIMO SEXTO: Que las demás probanzas allegadas al expediente y no pormenorizadas, en nada alteran lo razonado respecto de las pretensiones expuestas.



Foja: 1

Y visto lo dispuesto, en los artículos 44, 1437, 1439, 1445, 1448, 1545, 1546, 1547, 1556, 1557, 1558, 1560, 1698, y 1702 del Código Civil; 139, 144, 160, 170, 254 y siguientes, 341, 342, 346, y 356 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

- I. Que **se rechazan las objeciones** de documentos de folios 87, 88 y 90 del cuaderno principal;
- II. Que **se acogen las tachas** opuestas en audiencia de 17 de octubre de 2022 respecto de los testigos don John Alejandro Rodríguez Colmenares y don Nicolás Edison Muñoz Soto;
- III. Que **se acoge la demanda** de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, en todas sus partes, condenándose al Banco Itaú Corpbanca, representada por su gerente general, a pagar la suma de \$4.200.000.- por concepto de daño emergente, equivalente a la suma sustraída al demandante, más la suma de \$3.000.000.- por concepto de daño moral, suma que se pagará reajustada conforme a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y hasta la data de su entero y efectivo pago, más intereses legales, los que se calcularán desde la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta la época del pago efectivo;
- IV. Que habiéndose acogido la demanda principal, resulta inconducente pronunciarse respecto de la demanda subsidiaria;
y
- V. Que **no condena en costas** a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Rol C-3752-2021 (Digital)

**Dictada por don Andrés Fraser Pinto, Juez Titular del
Primer Juzgado Civil de Rancagua.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXRMXECVZXT

C-3752-2021

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Rancagua, diecisiete de Abril de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXRMXECVZXT